

LA POLÍTICA EXTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN REAGAN Y LA CRISIS SALVADOREÑA (1981-1986)

Lic. Wendinorto Rivas
Lic. Carlos Murillo Z.

CARLOS MURILLO ZAMORA
Licenciado en Relaciones Internacionales, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica.

WENDINORTO RIVAS
Politólogo salvadoreño.

Resumen de la tesis de grado *La Política Exterior de la Administración Reagan y la Crisis Salvadoreña, 1981-1986*. Heredia, Universidad Nacional, 1988.

Introducción

El Salvador no escapó a los efectos de las crisis cíclicas del sistema capitalista, y por el contrario tales efectos se vieron agravados por las características de su modelo de producción (alta concentración de la propiedad y de la riqueza y desmedida explotación de la mano de obra) y el régimen autoritario militar imperante desde los años 30.

A lo anterior se agrega la consolidación de organizaciones populares y político-militares dispuestas a romper el status quo a cualquier costo, aprovechando la crisis del régimen oligárquico, lo que se ve favorecido por las circunstancias exógenas, sobre todo el triunfo del FSLN en Nicaragua, imperantes a finales del decenio de los setenta.

Por consiguiente, el conflicto salvadoreño es el resultado de factores internos, a los que se agregan elementos externos, principalmente los vinculados a la relación con Estados Unidos, en cuanto superpotencia hegemónica que reclama, a principios de los años ochenta, con la llegada de Ronald Reagan a la Casa Blanca, la restauración del dominio en la Cuenca del Caribe y la defensa de su traspatio ante el expansionismo soviético. En ese ambiente El Salvador se convierte en el "test case" de la política exterior norteamericana y, por ende, en una cuestión de prestigio para los encargados de la toma de decisiones en Washington.

La Política Exterior Norteamericana hacia América Latina

El fundamento que sustenta, en gran medida, la política exterior de Estados Unidos se encuentra en el mensaje del presidente James Monroe, pronunciado ante el Congreso el 2 de diciembre de 1823. Monroe proclamó en ese discurso el principio de no injerencia de potencias europeas en el hemisferio occidental, dada la condición de independencia que

tienen los países del continente. Ese postulado se convirtió en el principio rector de la política exterior norteamericana hacia América Latina, y se orientó, desde el punto de vista estratégico "a mantener un equilibrio entre el poder militar de las Américas y el de Europa, mediante la estabilización de las posiciones europeas de ultramar", idea sobre la cual se desarrolla lo que más tarde se denomina la Doctrina Monroe.

Inicialmente América Latina vio en ese postulado un medio de protección a su soberanía y en algunos casos hubo manifestaciones de adhesión. Luego comprendieron que esa doctrina era aplicada como instrumento unilateral de la política exterior de Estados Unidos, y que tendía a expresar y exaltar los sentimientos nacionalistas del pueblo norteamericano. Por ello jamás llegó a tener un carácter multinacional, invocándose sólo cuando los intereses estadounidenses en el Caribe se veían amenazados.

Tras la Guerra de Secesión (1860-1865), los norteamericanos ven en las tesis de Monroe más que un instrumento de defensa contra la penetración europea, un medio para consolidar su presencia en el continente, con lo que surgen corolarios de la doctrina (Polk y Roosevelt) en un afán por garantizarse, ahora, la penetración estadounidense en la región. Así después de la guerra con España (1898) la política exterior norteamericana se orientó a extender su influencia en el Caribe. Primero Cuba, luego República Dominicana, posteriormente Puerto Rico y finalmente Centroamérica, que también habría de quedar "atrapada" dentro del campo de acción del poder norteamericano.

La interpretación de la Doctrina Monroe que más repercusiones provocaron en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, fue la realizada por el presidente Theodore Roosevelt (1901-1904), que en su mensaje anual dirigido al Congreso Norteamericano (diciembre de 1904) estableció lo que posteriormente fue denominado como la "Política del Gran Garrote" (Big Stick). Argumentando defender la democracia, Estados Unidos consolida y amplía su hegemonía política, económica y social en el hemisferio occidental. Es en este contexto que la Administración Taft (1909-1913) apoyó su expansión, en tanto que la de Woodrow Wilson se comprometió a mejorar las relaciones entre Estados Unidos y América

Latina. Sin embargo, los acontecimientos demostraron todo lo contrario. Wilson pretendió universalizar la Doctrina Monroe en el seno de la Sociedad de las Naciones. Ante las dificultades de lograr su cometido, se produce el retiro norteamericano y la consolidación de una nueva política: el "Aislacionismo Hemisférico".

La Buena Vecindad: un nuevo enfoque en la política exterior norteamericana

Al desaparecer la percepción de que las potencias europeas se aprovecharían de la inestabilidad política de América Latina, Estados Unidos redefine su actitud hacia lo que se denomina la "Política de Buena Vecindad", sustentada en el establecimiento de nuevas formas de cooperación y ayuda, tomando como base el respeto a los intereses que cada Estado tiene en la comunidad internacional.

Esas ideas fueron expuestas por el presidente Roosevelt en su discurso inaugural, al afirmar:

"En el campo de la política mundial quisiera consagrar a esta nación a la Política de Buena Vecindad, del vecino que respeta decididamente a sí mismo y, por ello, respeta los derechos de los demás, del vecino que respeta sus obligaciones y respeta lo sagrado de sus acuerdos en y con el mundo de sus vecinos".

Con esos planteamientos se inicia una nueva etapa en la política exterior norteamericana hacia la región que se complementa con el clima de guerra fría del momento.

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se configura como centro hegemónico del sistema capitalista. Paralelo a ello, la Unión Soviética se consolida como potencia dominante del bloque socialista. Esa situación conlleva a la constitución de la política de contención del comunismo, la que, posteriormente, es conocida como Doctrina Truman, la cual sostiene, en síntesis, que al dejar de ayudar a los países amenazados por el comunismo, se le conceden ventajas militares, estratégicas y políticas a los soviéticos.

Más tarde se propusieron otros argumentos para mantener y consolidar la hegemonía norteamericana, tales como la Alianza para el Progreso del presidente Kennedy y sus modificaciones posteriores, que introducen nuevos paráme-

tros para regular las relaciones Estados Unidos-América Latina, pero sobre todo con el istmo centroamericano.

A partir de ese momento las administraciones norteamericanas para lograr los objetivos de su política exterior recurren, no sólo a su poderío militar, sino también a diversos organismos financieros internacionales creados, principalmente, con capital estadounidense, tales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BIRF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Por su parte América Latina aceptó la adopción del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), que como alianza político-militar estableció un sistema de seguridad colectiva, con el que pretende contrarrestar la penetración del comunismo en Latinoamérica.

Por consiguiente, América Latina y, en particular, Centroamérica quedaron inmersas en esa política de contención en el marco de la guerra fría. La principal evidencia de esa inmersión de la región en la estrategia anticomunista fue Guatemala, país donde se desarrolla el "surgimiento y caída de la revolución social" durante el período comprendido entre 1945 y 1954. La transformación social se inició durante la Administración de Juan José Arévalo, sucedido por el Cor. Jacobo Arbens, quien implementó una reforma agraria a partir de junio de 1952. Arbens fue derrocado por un golpe auspiciado por la United Fruit Comp. y la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos.

Las opciones para la política exterior norteamericana en Centroamérica se resumen en la práctica a una política de contención que privilegia la vía estratégico-militar, la que indudablemente mantiene latente la posibilidad de una intervención militar directa, con sus consecuencias negativas para la región.

Origen, Desarrollo y Agudización de la Crisis Salvadoreña

La crisis salvadoreña tiene raíces muy profundas, por lo que se hace necesario remontarse al período de expropiación de las tierras ejidales y comunales en El Salvador en 1891, destinadas a suprimir todos los obstáculos para el desarrollo del cultivo del café, para comprender su verdadera dimensión.

Una vez finalizado ese proceso de apropiación y concentración de la tierra, se consolidan dos fuerzas sociales



conformadas por los conservadores y los liberales, cuyas diferencias ideológicas giraban en torno a aspectos económicos, coincidiendo en el plano político por su interés en el poder, el que alternaban con cierta frecuencia, ya sea a través de golpes o cuartelazos militares o bien a través del continuismo familiar.

Por lo tanto, toda explicación de la crisis salvadoreña debe considerar el impacto de la crisis mundial de 1929, ya que ésta afectó a todos los sectores sociales. Uno de los efectos de ese "crack económico" más palpables fue la gran depresión que llevó al enfrentamiento entre los sectores dominantes y de éstos con los sectores populares. En ese contexto se resalta el triunfo del laborismo abanderado por el Ing. Arturo Araujo, quien fue depuesto por un golpe militar el 2 de diciembre de 1931. A la caída de Araujo se formó un Directorio Militar, que llamó al Vicepresidente Gral. Maximiliano Hernández Martínez, a ocupar la primera magistratura de la nación. Así se inicia lo que se conoce como el ascenso del militarismo en El Salvador, que llega hasta nuestros días.

El régimen dictatorial de Hernández Martínez enfrentó diversos problemas, entre ellos, la negativa del gobierno norteamericano a reconocerlo, argumentando que el golpe de estado violaba el Tratado de Washington de 1923; el descontento popular por el impacto de la crisis económica que arranca en 1929 y afecta a todos los sectores salvadoreños; pero sobre todo la insurrección campesina que estalló el 22 de enero de 1932 y que fue sofocada por el ejército, marcando un hito en la historia del movimiento popular. Los hechos sangrientos de 1932 generaron una mayor colaboración entre la oligarquía y el Gral. Hernández Martínez, al ofrecerle aquéllos todo su apoyo por haber aplastado el levantamiento campesino de corte comunista.

Durante medio siglo la oligarquía en alianza con la Fuerza Armada se ha mantenido en el poder, y en ese sentido, el proceso político en su conjunto ha sido orientado a favorecer los intereses de la minoría, en perjuicio de los de los grandes sectores populares. Esa situación cerró, prácticamente en su totalidad, el espacio político a los partidos de oposición y a los movimientos antistatus quo.

A ese ambiente endógeno de la crisis salvadoreña se agrega el marco subregional, sobre todo en el contexto de la participación de El Salvador en el Mercado Común Centroamericano, el que intentó poner en práctica un modelo integracionista que no arrojó ningún beneficio para la clase trabajadora, al no obtener ésta ningún porcentaje de los excedentes del capital de las burguesías nacionales. Al terminar los años sesenta el Mercomún fracasa, agravando la situación prevaliente en los países del área, donde se acentúa la injusticia

social, la marginalidad política y la pérdida de credibilidad en el gobierno, factores que definitivamente crearon las condiciones propias para el surgimiento de nuevas formas de organización social.

Las Organizaciones Populares: nuevas formas de expresión social

A partir de la década de los sesenta, los sectores populares ante la agudización de la crisis económica, social y política intensificaron sus demandas, exigiendo al gobierno la puesta en práctica de un plan tendente a encontrarle solución a la crisis. Por su parte, las autoridades gubernamentales no mostraron voluntad para resolver los graves problemas existentes, lo que dio paso al surgimiento de las nuevas organizaciones populares, la mayoría de ellas con un alto grado de combatividad.

A partir de los años setenta las organizaciones superaron las estructuras que le dieron origen y crearon brazos militares para enfrentar por la vía armada al régimen militar. Así surgen las Fuerzas Populares de Liberación, Ejército Revolucionario Popular y Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional, las que junto al Partido Comunista de El Salvador y el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, se aglutinaron en 1980 en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

En términos generales se puede decir que las organizaciones político-militares pretendieron instaurar un gobierno popular, democrático y revolucionario de amplia participación popular, según los argumentos definidos en sus plataformas doctrinarias.

Por otra parte, conforme las tensiones políticas se agravaron tras la guerra con Honduras, los partidos políticos de oposición consideran propicio el momento para formular un planteamiento alternativo al del régimen oligárquico-militar, formando una "alianza táctica", cuyo objetivo principal fue disputarle electoralmente el poder al oficialista Partido de Conciliación Nacional (PCN). Fue así como se creó la Unión Nacional Opositora (UNO), que estuvo integrada por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) y la Unión Democrática Nacionalista (UDN). Esa oposición democrática decidió participar en las elecciones presidenciales de 1972, presentando una fórmula encabezada por Napoleón Duarte y a Guillermo Ungo para Presidente y Vicepresidente de la República, respectivamente.

La UNO fue despojada de su triunfo por el fraude electoral cometido por el PCN, que impuso al Cor. Arturo Armando Molina (1972-1976). Con este resultado se cerraron



El fracaso del proyecto reformista de octubre de 1979 y la frustración de las amplias mayorías populares ante la incapacidad del sistema para favorecer sus demandas, culminó con la formación del FMLN, permitiendo que el movimiento popular intensificara su accionar político y militar.

las posibilidades de establecer un gobierno democrático y lograr una transición pacífica hacia el mismo.

Ante el fracaso de la vía electoral las organizaciones populares intensificaron sus acciones en procura de implementar sus plataformas reivindicativas, ante lo cual el gobierno del Cor. Molina intentó implementar un plan de transformación agraria orientado a modernizar el sistema capitalista en El Salvador. Este proyecto generó fuertes reacciones, al grado de originarse un enfrentamiento entre el gobierno y la empresa privada, a lo que se agregan las reiteradas demandas de organizaciones políticas y sociales sobre mejores condiciones de vida para los sectores populares, que se veían acalladas por el enorme aparato represivo del régimen.

Con el impasse de la transformación agraria, prácticamente llegó a su fin la gestión presidencial del Cor. Molina. La convocatoria electoral para elegir al nuevo gobernante permitió un leve resurgimiento del movimiento popular y de los partidos políticos de oposición, los cuales fueron prácticamente "silenciados" por la represión gubernamental.

Las elecciones de 1977 fueron una vez más fraudulentas, dando estocada final a la UNO. Mediante ese fraude el

oficialista PCN obtiene la Presidencia de la República, esta vez para el Gral. Carlos Humberto Romero. Esa acción ilegítima reafirmó, una vez más, la inviabilidad de las elecciones como medio para alcanzar el poder. De esa manera, los hechos violentos del 28 de febrero de 1977, coadyuvaron a hacer más necesaria la presencia insurgente, la cual rápidamente llegó a plantear una "situación revolucionaria". Este factor agudizó las contradicciones en el "bloque del poder". La expresión concreta de esa crisis se manifiesta en el golpe de estado que derroca al Gral. Romero el 15 de octubre de 1979.

La situación interna e internacional y el triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) fortalecieron las tesis del recambio en el sistema no sólo en Estados Unidos, sino al interior del ejército salvadoreño, quien con este hecho inició el proceso de reformas sociales y la democratización del país.

Las reacciones de los distintos sectores sociales ante el golpe de estado fueron diversas, entre las cuales destacan las de las organizaciones populares que condenan la acción y la califican de un intento de Estados Unidos para detener el avance del movimiento revolucionario y consolidar su presencia en el país.

La Iglesia Católica, por su parte, ve con "buenos ojos" el derrocamiento del Gral. Romero; en tanto que la Universidad José Simeón Cañas (UCA) expresa su preocupación por los acontecimientos sucedidos después de la asonada militar, tales como: la represión, la tardanza en implementar las reformas estructurales, el mantenimiento de jefes militares acusados de graves violaciones a los derechos humanos en sus puestos y con sus privilegios.

El papel de la Fuerza Armada en el nuevo proceso político es presentado a partir de la composición de una primera Junta Cívico-Militar, compuesta por civiles de diferentes tendencias ideológicas y militares jóvenes. Esa primera junta fue juramentada el 17 de octubre de 1979 y disuelta en enero de 1980. La segunda Junta de Gobierno se formó el 10 de enero de 1980 a través de un pacto político de la institución armada con elementos demócrata cristianos, en el que ambas partes aceptaron públicamente respetar los derechos humanos, impulsar los cambios estructurales, dialogar con todos los sectores populares y definir su posición como gobierno antioligárquico. Ese cambio provocó una redefinición del esquema reformista, la promulgación de la Ley de Reforma Agraria y la nacionalización del comercio exterior y de la banca.

Las reformas sociales afectaron a todos los sectores sociales del país, en ese sentido las protestas fueron unánimes y en ellas se detectó un denominador común: su rechazo.

El fracaso del proyecto reformista de octubre de 1979 y la frustración de las amplias mayorías populares ante la incapacidad del sistema para favorecer sus demandas culminó con la formación del FMLN, como lo citamos antes, permitiendo que el movimiento popular intensificara su accionar político y militar, el cual incidió en la obstaculización del proyecto en cuestión.

La juventud militar falló en su diagnóstico de la situación política después del golpe de estado de 1979, ya que pensaron que las condiciones para un cambio real estaban dadas, pero al no considerar dentro de su proyecto político a los sectores populares que eran parte de las contradicciones, fracasa.

La política exterior de la Administración Reagan hacia El Salvador

Los argumentos ideológicos de la Administración Reagan en lo referente a su política exterior parten de la creencia que "la mayor política exterior no puede preservar la paz y proteger el reino de la libertad a menos que esté respaldada por un poder militar adecuado". Ello es el resultado del auge neoconservador motivado en la derrota norteamericana en Vietnam y el escándalo Watergate, con lo que se intenta revertir la "crisis de gobernabilidad" que afectó a las altas esferas del gobierno norteamericano durante los años setenta, como lo reconocía la Comisión Trilateral.

A lo anterior se agrega la actitud de la Administración Carter que, según el movimiento neoconservador, aceleró la crisis de hegemonía y erosionó el poderío y la presencia de Estados Unidos en áreas claves para sus intereses de seguridad. Reagan afirma durante su campaña electoral que "todos hemos sido deshonrados, nuestra credibilidad de gran nación ha sido comprometida, por no decir otra cosa. Nuestro escudo se ha oxidado".

Tales preceptos condicionaron la política norteamericana hacia Centroamérica en momentos que el istmo enfrentaba profundos cambios con el derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua y el golpe de estado de octubre de 1989 en El Salvador.

Ante los nuevos agentes de cambio social que surgieron en Centroamérica, desafiando la tradicional hegemonía norteamericana, Washington argumenta que la crisis centroamericana es un desafío que hay que neutralizar con una adecuada política exterior. En el caso concreto de El Salvador esa política se orienta a impedir que los sectores de izquierda alcancen el poder. Esa situación conduce a la Administración Reagan a afirmar que los movimientos guerrilleros sólo pueden ser derrotados mediante una política firme que lleva a su

desarticulación total, como se mencionaba en la Plataforma del Partido Republicano y en el documento del Comité de Santa Fe. Esa nueva concepción de la política exterior se venía considerando desde los últimos meses de la Administración Carter.

La Administración Reagan en su política hacia Centroamérica ha privilegiado la visión estratégica, es decir, que el istmo es analizado como escenario de la confrontación Este-Oeste, dejando de lado los elementos internos del conflicto. Desde esa perspectiva Washington basó su política en una combinación de tres factores:

1. El apoyo a los aliados que luchan contra el expansionismo soviético (El Salvador) y a los sectores (sobre todo los contras) que se oponen a aquellos gobiernos que tienen una tendencia favorable a la Unión Soviética (Nicaragua).
2. La de alentar la participación de actores regionales en la búsqueda de mecanismos que aseguren una relación que represente los intereses de Estados Unidos, Grupo Nassau, Foro Pro Paz y Democracia, Comunidad Democrática Centroamericana.
3. La consideración de una intervención militar directa si existe la generalización de gobiernos antinorteamericanos (Kissinger).

Desde la llegada de Ronald Reagan al poder, El Salvador fue caracterizado como el test case de la nueva política de contención, en la que la teoría del dominó desempeña un papel primordial. En ello incidió dos acontecimientos salvadoreños: el fortalecimiento militar de la guerrilla (FMLN) y la inestabilidad del régimen de unidad nacional, encabezado por Alvaro Magaña (1982-1984). Así a principios de 1983 se produce una readecuación de esa política influida, principalmente, por Jeane Kirkpatrick, quien recomienda una línea más dura en el caso salvadoreño. Este nuevo planteamiento insistió en incrementar la presencia norteamericana, aumentar la presión política sobre el Congreso, centralizar la toma de decisiones en materia política exterior, acelerar la desestabilización del régimen de Managua y utilizar todos los recursos disponibles para crear una opinión pública favorable.

Reagan y sus más cercanos colaboradores tenían una clara determinación política: impedir, a cualquier precio, el ascenso de las fuerzas revolucionarias al poder en ese país, para lo que intensificaron la ayuda económica y militar a sus aliados salvadoreños. Esa visión condicionó la relación establecida con el gobierno demócrata cristiano, encabezado por José Napoleón Duarte y, en particular, con la Fuerza Armada,

a través de la Doctrina Kramer, que enfatiza su relación con El Salvador mediante dos elementos teóricos:

1. La individualización de las Fuerzas Armadas como el actor político más capacitado para encontrar una salida a la crisis y como el más confiable en la salvaguarda de los intereses fundamentales de Estados Unidos.
2. El señalamiento de que para lograr un balance militar favorable se haría necesario impulsar, desde el gobierno, un programa de reformas sociales e importantes sectores rurales y urbanos que parecían en ese momento vacilantes, y respecto de los cuales se corría el riesgo de que engrosaran las fuerzas de oposición, si el conflicto se prolongaba y sus costos aumentaban sin que el gobierno exhibiera una firme capacidad de dirección política.

El proceso electoral salvadoreño de 1984 se desarrolló dentro de un clima de violencia caracterizado por choques



Reagan y sus colaboradores tenían una clara determinación política: impedir el ascenso de las fuerzas revolucionarias al poder en El Salvador; esa visión condicionó la relación establecida con el gobierno demócrata cristiano, encabezado por José Napoleón Duarte.



armados, acciones de sabotaje económico y violaciones a los derechos humanos. Durante la campaña se evidencia la polarización entre la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC). En esa pugna Washington respalda a los segundos, cuya plataforma política se ajusta más a los elementos de la estrategia de guerra norteamericana, en la que la reforma agraria, por ejemplo, jugaba un papel determinante.

Los resultados favorecieron al PDC y de esa manera el proceso se constituyó en un arma política como alternativa a la tesis del diálogo y la negociación, de acuerdo con los intereses de Estados Unidos. Las elecciones de 1984 no constituyeron una solución a la crisis nacional en la percepción del FMLN.

En relación con la ayuda económica, el monto de la asistencia militar y financiera norteamericana se incrementó considerablemente. Para el período 1979-1985 esa cooperación se estima en unos \$2.000 millones, y se tornó vital para mantener la capacidad operacional del gobierno y el ejército salvadoreño en su lucha contra la alianza FMLN-FDR.

La asistencia financiera norteamericana ha provocado que la economía salvadoreña dependa cada vez más de la ayuda externa, lo que ha aumentado considerablemente la deuda externa. En términos generales, según Estados Unidos, esa masiva ayuda ha evitado que El Salvador caiga en la esfera de dominación de los países socialistas.

El objetivo de Washington es desarrollar y consolidar un modelo de democracia formal, en el cual se respeten los resultados de unas elecciones restringidas, al tiempo que se mejore el respeto a los derechos humanos.

A esos argumentos se agrega el esfuerzo por reconstruir la economía, mediante programas como el "Plan Unidos para Reconstruir" implementado por la Fuerza Armada, como un intento por restar credibilidad a los argumentos del FMLN para restarle apoyo y llevarlo a un plano de lucha estrictamente política, mientras el ejército se transformaba en una fuerza de reacción rápida, apta para la guerra de guerrillas.

En definitiva, es necesario reconocer que la subordinación de la política estatal de las exigencias del proyecto norteamericano de contrainsurgencia ha agudizado la crisis económica. Puede afirmarse durante estos dos últimos años, que la economía salvadoreña ha empeorado considerablemente. El déficit externo se amplió a un nivel autónomamente insostenible, la inflación aceleró su ritmo, la deuda externa se expandió y la ayuda económica norteamericana se constituyó en el principal soporte de la actividad económica.

En vez de enfrentar las causas estructurales de la crisis y de abandonar la estrategia diseñada en función de la seguridad nacional norteamericana y no de las necesidades e intereses del pueblo salvadoreño, buscando seriamente una solución política realista al conflicto, el gobierno optó por implementar una política de estabilización, la cual únicamente pretendía aliviar los grandes desequilibrios acumulados hasta el presente, con el fin de poder continuar con la estrategia contrainsurgente, a costa de sacrificar aún más las condiciones de vida de los sectores populares.

El proyecto norteamericano seguirá imponiéndose al gobierno y a la Fuerza Armada en los próximos años. Esto significa que la guerra continuará siendo el eje central en torno al cual oscilará la gestión del presidente José Napoleón Duarte.

Conclusión

La política exterior de la Administración Reagan pretendió resolver la crisis salvadoreña a través de reformas socio-económicas que tenían como objetivo principal romper la dominación oligárquica y restarle la base al movimiento popular. Desde esa perspectiva la Administración Duarte, por su parte, puso en vigor algunas medidas democratizadoras, tales como: la superación de los fraudes electorales, mayor libertad de expresión, mayor institucionalidad de la Fuerza Armada y de los Cuerpos de Seguridad y la separación del Poder Judicial de los Poderes Legislativo y Ejecutivo.

La política de la Administración Reagan hacia El Salvador se encaminó a obtener una solución militar para reafirmar la hegemonía de Estados Unidos en Centroamérica.

Por consiguiente, hay que enfrentar el principio funda-

mental del conflicto: la injusticia estructural, la que indefectiblemente pasa por la satisfacción de las necesidades básicas de la población mediante un reordenamiento de la riqueza y el poder.

Hay que superar el conflicto salvadoreño de la confrontación Este-Oeste, reduciendo al máximo la injerencia de potencias extranjeras, ya que de ninguna manera se debe someter la solución de la crisis a los intereses norteamericanos o soviéticos.

Enfrentar con realismo el problema de la guerra. Estos años de conflicto han demostrado no solamente la crueldad de la confrontación bélica sino un hecho cierto, el cual es, que no se vislumbra una solución en un tiempo previsible. En ese sentido el diálogo puede conducir a alcanzar al menos, la humanización de la guerra, control de todas las formas de terrorismo, limitación de las acciones de ambos bandos a objetivos estrictamente militares.

Definitivamente debe perfeccionarse la actual apertura política, para que puedan expresarse todas las fuerzas sociales incluyendo al Frente Democrático Revolucionario (FDR). En ese sentido hay que crear los mecanismos de seguridad necesarios para que la oposición democrática tenga presencia en todo el territorio nacional.

En síntesis, el origen del conflicto salvadoreño se encuentra en las injustas estructuras económico-sociales; aunque cada vez más se han hecho presente los intereses de las grandes potencias. No es un conflicto unipolar, solamente con Estados Unidos, sino bipolar, donde la Unión Soviética y sus aliados tratan de negar su participación en el conflicto salvadoreño; obviamente, en beneficio de sus intereses estratégicos.